

**Señor**

Juez Administrativo del Circuito  
E.S.D.

**REFERENCIA:** Acción constitucional de tutela

**DERECHOS:** AL DEBIDO PROCESO (ART 29 C.P.), IGUALDAD (ART. 13 C.P.) Y AL ACCESO AL EMPLEO PUBLICO TRAS CONCURSO DE MERITO (ART 40 NUMERAL 7 Y ART 125 C.P.); PRINCIPIO DE LA CONFIANZA LEGITIMA (ART 29 C.P.); A LA DIGNIDAD HUMANA (ART 1 C.P.); DE PETICIÓN (ART. 23)

**ACCIONANTE:** KARINA COROMOTO DIAZ JAIMES

**ACCIONADOS:** GOBERNACIÓN DE MAGDALENA

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC

**VINCULADOS:** Miembros de la Lista de Elegibles Código OPEC No. 4849 y Personas vinculadas vacante(s) definitiva(s) del empleo denominado PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Código 219, Grado 2, que se encuentren vinculados en provisionalidad, temporalidad o encargo en la GOBERNACION DEL MAGDALENA - MAGDALENA, Proceso de Selección Convocatoria Nos. 1137 a 1298 y 1300 a 1304 de 2019 - Boyacá, Cesar y Magdalena / GOBERNACION DEL MAGDALENA

Yo, **KARINA COROMOTO DIAZ JAIMES** mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía número 1.094.242.834, me permito interponer ACCION CONSTITUCIONAL DE

TUTELA en ejercicio de las facultades que me otorga el artículo 86 de la Constitución Política y las normas concordantes de los Decretos 2591 de 1991 , 306 de 19922 y 1382 de 2003 , de la siguiente manera:

1.	ENTIDADES ACCIONADAS ENUNCIACION DE DERECHOS VULNERADOS SOLICITUD DE VINCULACION -----	2
2.	FUNDAMENTOS FACTICOS -----	3
3.	PRETENCIONES-----	13
4.	FUNDAMENTOS DE DERECHOS -----	15
5.	EXISTES VACANTES EN LA GOBERNACION DEL MAGDALENA EN LA ACTUALIDAD---	20
6.	DERECHO DE LOS PROFESIONALES FRENTE A LOS QUE SE ENCUENTRAN EN LISTAS DE ELEGIBLES EN CUANTO A EMPLEOS PUBLICOS-----	20
7.	LA NO APLICACIÓN DEL DECRETO 498 DE 2020 Y DE LOS ARTICULOS 6 Y 7 DE LA LEY 1960 de 2019 -----	23
7.	CONFUSION TRANSMITIDA EN EL COMUNICADO CNSC DEL 16 DE ENERO; ACUERDO 165 DEL 16 DE MARZO DE 2020 DE LA CNSC EVADIERA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 6 Y 7 DE LA LEY 1960 DE 2019-----	24
8.	PRUEBAS ANEXOS-----	26

1. ENTIDADES ACCIONADAS ENUNCIACION DE DERECHOS VULNERADOS SOLICITUD DE VINCULACION

La actual Acción de Tutela la presento en contra de la entidad de derecho público conocida como GOBERNACIÓN GOBERNACION DEL MAGDALENA representada esta por el gobernador, o quien haga sus veces, y quien operara como ENTIDAD ACCIONADA en el presente proceso constitucional, el cual se ha iniciado a fin de que sean salvaguardados mis AL DEBIDO PROCESO (ART 29 C.P.), IGUALDAD (ART. 13 C.P.) Y AL ACCESO AL EMPLEO PUBLICO TRAS CONCURSO DE MERITO (ART 40 NUMERAL 7 Y ART 125 C.P.); PRINCIPIO DE LA CONFIANZA LEGITIMA (ART 29 C.P.); A LA DIGNIDAD HUMANA (ART 1 C.P.); DE PETICIÓN (ART. 23)

De igual modo pretendo que sean VINCULADOS a la siguiente Acción de Tutela la entidad de derecho público Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), representada por su representante legal, gerente o quien haga sus veces, pues la misma ha participado en la organización, preparación, coordinación y adelantamiento del concurso de Merito a través del “Proceso de Selección Convocatoria Nos. 1137 a 1298 y 1300 a 1304 de 2019 - Boyacá, Cesar y Magdalena / GOBERNACION DEL MAGDALENA ” ha emitido conceptos y criterios interpretativos al respecto del modo y mecanismos de utilización de las Listas de Elegibles emanantes de la citada convocatoria, y debe ser partícipe de los procesos de nombramiento

Accionadas: COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL  
– CNSC GOBERNACIÓN DE MAGDALENA

Accionante: KARINA COROMOTO DIAZ JAIMES

de los citados elegibles, ya que, en el caso concreto, la GOBERNACION DEL MAGDALENA , de cara a utilizar la Lista de Elegibles de la OPEC No. 4849 GOBERNACION DEL MAGDALENA - MAGDALENA, Proceso de Selección Convocatoria Nos. 1137 a 1298 y 1300 a 1304 de 2019 - Boyacá, Cesar y Magdalena / GOBERNACION DEL MAGDALENA debe solicitar autorización a la CNSC y adaptarse a los procedimientos internos de la entidad.

Por otro lado, y al ser este un proceso de su entero interés, se considera oportuno y necesario que sean vinculados al presente Proceso de Tutela los ciudadanos incluidos en la Lista de Elegibles de la OPEC No. 4849 GOBERNACION DEL MAGDALENA - MAGDALENA, Proceso de Selección Convocatoria Nos. 1137 a 1298 y 1300 a 1304 de 2019 - Boyacá, Cesar y Magdalena / GOBERNACION DEL MAGDALENA y las Personas vinculadas con empleos denominado PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Código 219, Grado 2, en la GOBERNACIÓN DE DEL MAGDALENA que se encuentren trabajando en dicha institución y que se encuentren nombrados bajo la categoría de provisionalidad, temporalidad, o encargo que incluye cargos creados después de la expedición de la Ley 1960 de 2019, todo ello ya no solo porque las personas mencionadas puedan tener interés legítimo en la resolución del problema ius fundamental que a través de la presente acción de tutela se está planteando, sino porque es posible que alguno de ellos pueda verse afectado por las decisiones que a través del presente proceso puedan tomarse.

## 2. FUNDAMENTOS FACTICOS

2.1 Se firmo “Acuerdo No. CNSC – 20191000004476 del 14 de mayo de 2019, mediate el cual se convocó a concurso público de méritos para proveer definitivamente uno (1) vacante(s), del/de la GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA, pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa, identificado/a como la GOBERNACION DEL MAGDALENA - MAGDALENA -.

Que en virtud de lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 291 del Acuerdo precitado, en concordancia con lo previsto en el numeral 4º del artículo 312 de la Ley 909 de 2004, vigente para la fecha de expedición del mencionado Acuerdo, una vez realizadas todas las etapas del proceso de selección y publicados los resultados definitivos obtenidos por los aspirantes en cada una de las pruebas aplicadas, la CNSC elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de méritos se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las que se generen en vigencia de la lista”.

2.2 Me inscribí en el proceso de selección Convocatoria Nos. 1137 a 1298 y 1300 a 1304 de 2019 - Boyacá, Cesar y Magdalena/ GOBERNACION DEL MAGDALENA de la Comisión Nacional del Servicio Civil, proceso destinado a proveer plazas ofertadas en concurso para el empleo PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Código 219, Grado 2 para la entidad de derecho público GOBERNACION DEL MAGDALENA cumplí con todos los requisitos necesarios para

Accionadas: COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL  
– CNSC GOBERNACIÓN DE MAGDALENA

Accionante: KARINA COROMOTO DIAZ JAIMES

formalizar mi inscripción, y realicé todas las pruebas que formaban parte del proceso, por lo que logré alcanzar el tercer lugar de esta lista de legible RESOLUCIÓN No 2590 25 de febrero de 2022.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Conformar y adoptar la Lista de Elegibles para proveer **uno (1)** vacante(s) definitiva(s) del empleo denominado **PROFESIONAL UNIVERSITARIO**, Código **219**, Grado **2**, identificado con el Código OPEC No. **4849**, **GOBERNACION DEL MAGDALENA - MAGDALENA** -, del Sistema General de Carrera Administrativa, así:

POSICIÓN	DOCUMENTO	NOMBRES	APELLIDOS	PUNTAJE
1	52899321	LEIDI MARCELA	RODRIGUEZ PRADO	85.70
2	1043931224	DUBAN	CASTRO SALCEDO	83.14
3	1094242834	KARINA COROMOTO	DIAZ JAIMES	79.88

2.3 Se realiza seguimiento a la aceptación de vacante Código OPEC No. 4849 Proceso de Selección Convocatoria Nos. 1137 a 1298 y 1300 a 1304 de 2019 - Boyacá, Cesar y Magdalena / GOBERNACION DEL MAGDALENA y las Personas vinculadas con empleos denominados PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Código 219, Grado 2 la cual se nombra mediante acto administrativo DECRETO 195 de 19 may 2022 - se hace nombramiento a Leidi Marcela Rodríguez Prado y se termina nombramiento de Rosalba Navarro Diaz Granados **en el cual se referencia** ante solicitud realizada por la señora Rosalba Navarro Diaz Granados y condición de la misma lo siguiente:

Que una vez revisado la planta global de cargos de la planta central de la entidad, la Oficina de Talento Humano certificó que existe en la misma, cuatro (4) empleos de (4) PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Código 219, Grado 02, sin embargo, en dichos cargos serán reubicados de acuerdo al orden de protección los empleados en provisionalidad que acrediten tener la condición de enfermedad catastróficas o ruinosas o en su defecto los padres o madres cabeza de familia de conformidad con lo consagrado en el parágrafo 2 del artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015.

2.3 Realicé un derecho de petición el día 28 de octubre de 2022 a la GOBERNACION DEL MAGDALENA así:

San José de Cúcuta, 28 de octubre 2022

Doctor  
**CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR**  
Gobernador  
Departamento Magdalena  
Carrera 1c N°16-15 Palacio Tayrona  
Santa marta magdalena

**REF: Derecho de petición solicitud de información**

Cordial saludo.

Yo **KARINA COROMOTO DIAZ JAIMES**, identificado con cédula de ciudadanía número 1094242834 expedida en Pamplona, me permito relacionar que participe de la Convocatoria Nos. 1137 a 1298 y 1300 a 1304 de 2019 - Boyacá, Cesar y Magdalena/ GOBERNACION DEL MAGDALENA; mediante la **RESOLUCIÓN No 2590** del 25 de febrero de 2022 la comisión nacional del servicio civil conforma y adopta la Lista de Elegibles para proveer uno (1) vacante(s) definitiva(s) del empleo denominado **PROFESIONAL UNIVERSITARIO**, Código **219**, Grado **2**, identificado con el Código **OPEC No. 4849**, GOBERNACION DEL MAGDALENA - MAGDALENA -, del Sistema General de Carrera Administrativa" ocupando el tercer lugar de esta lista de legibles.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Conformar y adoptar la Lista de Elegibles para proveer **uno (1)** vacante(s) definitiva(s) del empleo denominado **PROFESIONAL UNIVERSITARIO**, Código **219**, Grado **2**, identificado con el Código OPEC No. **4849**, GOBERNACION DEL MAGDALENA - MAGDALENA -, del Sistema General de Carrera Administrativa, así:

POSICIÓN	DOCUMENTO	NOMBRES	APELLIDOS	PUNTAJE
1	52899321	LEIDI MARCELA	RODRIGUEZ PRADO	85.70
2	1043931224	DUBAN	CASTRO SALCEDO	83.14
3	1094242834	KARINA COROMOTO	DIAZ JAIMES	79.88

Dado a lo anterior relacionado y mi interés ante la presente vacante se ha venido realizando seguimiento a la publicación de las gacetas de NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA, Observando en acto administrativo de nombramiento DECRETO 195 DE 19 MAY 2022 - SE HACE NOMBRAMIENTO A LEIDI MARCELA RODRÍGUEZ PRADO (primera en lista de legibles) y ante la terminación de provisionalidad del nombramiento de ROSALBA NAVARRO DIAZ GRANADOS se generan acciones por la condición especial ante situación excepcional (estatus de pre pensionada); ubicándola en el tercer grupo de acuerdo

al orden de protección que debe tener en cuenta la entidad en el momento de realizar los nombramientos en periodo de prueba.

En atención a lo anterior descrito y en atención al decreto 1083 del 2005 parágrafo 3 artículo 2.2.5.3.2; **la oficina de talento humano de la gobernación de magdalena revisa planta global de cargos de la planta central de la entidad certificando la existencia de cuatro (4) empleos PROFESIONAL UNIVERSITARIO, código 219, grado 2**

Siendo este, la razón de la presente solicitud:

**Estado actual de cada uno de los (4) empleos PROFESIONAL UNIVERSITARIO, código 219, grado 2 de los cuales a oficina de talento humano referencia en acto administrativo en donde se detalle tipo de nombramiento; si este es por priorización cual, por uso de lista de legibles y referencia del acto administrativo mediante el cual se realizo dichos nombramientos.**

La presente respuesta se puede realizar por medio físico o electrónico en los canales que referencio a continuación;

[Karcodija85@hotmail.com](mailto:Karcodija85@hotmail.com)

calle 10 bn# 4ª -69 el bosque

Sin otro particular



KARINA COROMOTO DIAZ JAIMES  
C.C.1094242834 de pamplona  
[karcodija85@hotmail.com](mailto:karcodija85@hotmail.com)  
calle 10 bn# 4ª -69 el bosque

2.4. La Gobernación de GOBERNACION DEL MAGDALENA respondió el derecho de petición señalando los nombramientos efectuados en PROVISIONALIDAD para cada una de las 4 vacantes del empleo denominado PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Código 219, Grado 2 de la siguiente manera:



GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA  
15/11/2022 18:34:26 Folios: 2  
Origen: 310 /OTH/OFCINA DE TALENTO  
HUMANO  
Destinatario: KARINA COROMOTO DIAZ JAIMES,



Santa Marta D.T.C.H., 15 de noviembre de 2022

Señora  
**KARINA COROMOTO DIAZ JAIMES**  
Email: [karcodija85@hotmail.com](mailto:karcodija85@hotmail.com)  
San José de Cúcuta – Norte de Santander

REF.: Respuesta Derecho de Petición solicitud de información.

Cordial saludo.

En atención a su solicitud, identificada con radicado interno R-2022-023008 del 28 de octubre de 2022, como Jefe de la Oficina de Talento Humano de la Administración Central Departamental del Magdalena, a continuación se relaciona la información inherente a la Provisión de los cuatro (4) cargos de Profesional Universitario, código 219, grado 02, mencionados en el Decreto No. 195 del 19 de mayo de 2022, así:

1. Mediante Decreto No. 390 del 7 de julio de 2022, artículo séptimo se efectúa el nombramiento provisional de la Señora PATRICIA ELENA SERRANO PACHECO, por acreditar condición de salud en estado de debilidad manifiesta, hasta la expedición de la correspondiente lista de elegibles producto del concurso de méritos. Dependencia: Secretaría de la Mujer y Equidad de Género. Reportado en SIMO para la Nueva Convocatoria.
2. Mediante Decreto No. 508 del 5 de septiembre de 2022, artículo séptimo se efectúa el nombramiento provisional de la Señora BEATRIZ JIMENEZ LOPEZ, por acreditar condición de salud en estado de debilidad manifiesta, hasta la expedición de la correspondiente lista de elegibles producto del concurso de méritos. Dependencia: Secretaría de la Mujer y Equidad de Género. Reportado en SIMO para la Nueva Convocatoria.
3. Mediante Decreto No. 526 del 12 de septiembre de 2022, se efectúa el nombramiento provisional del Señor EDWIN HOVER BRAVO VASQUEZ, por no haber empleado de carrera administrativa en el nivel inferior que acredite la totalidad de los requisitos para ser encargado. Dependencia: Área Funcional de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda. Reportado en SIMO para la Nueva Convocatoria.

Carrera 1c N° 16-15 Palacio Tayrona  
PBX: 5-4381144  
Código Postal: 470004  
[www.magdalena.gov.co](http://www.magdalena.gov.co)  
[contactenos@magdalena.gov.co](mailto:contactenos@magdalena.gov.co)

@gubernaciondelmagdalena

@MagdalenaGober

@magdalenaGober



4. Mediante Decreto No. 527 del 12 de septiembre de 2022, se efectúa el nombramiento provisional del Señor DUVAN ALEXIS TORO GONZALEZ, por no haber empleado de carrera administrativa en el nivel inferior que acredite la totalidad de los requisitos para ser encargado. Dependencia: Oficina Asesora de Planeación. Reportado en SIMO para la Nueva Convocatoria.

Cordialmente

  
**EMMA PEÑATE ARAGÓN**  
Jefe de Oficina de Talento Humano

Proyectó:   
Profesional Especializado

  
Revisó: Julieth Toledo  
Asesor Jurídico Externo



2.5 Se realiza verificación en la pagina WEB de la gobernación de magdalena consultando los decretos de nombramiento:

### Decreto N°390 del 7 de julio del 2022

<https://www.gobernaciondelmagdalena.gov.co/mdocs-posts/decreto-390-de-7-de-julio-de-2022-por-medio-del-cual-se-nombra-luz-garcia-y-termina-provisionalidad-patricia-serrano/#:~:text=DECRETO%20390%20DE%207%20DE,PATRICIA%20SERRANO%20%2D%20Gobernaci%C3%B3n%20del%20Magdalena>

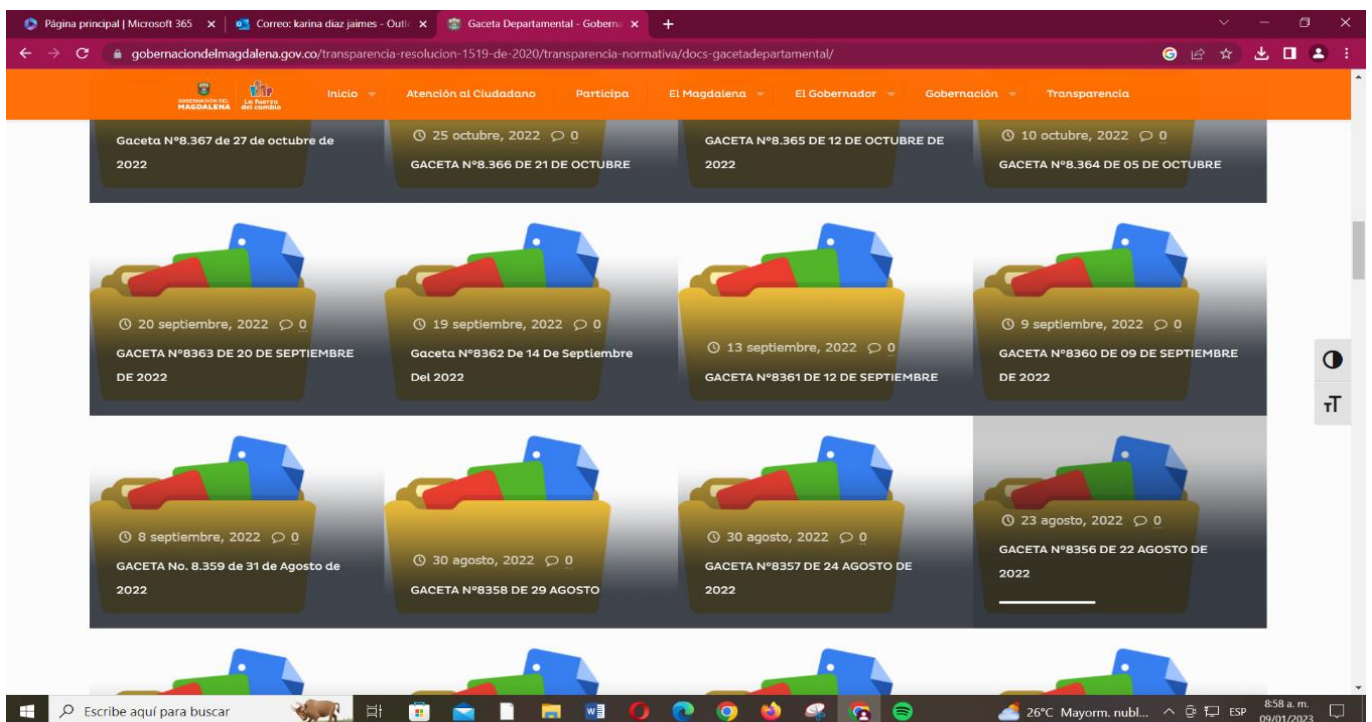
Dentro del mismo señala:

Que la señora **PATRICIA ELENA SERRANO PACHECO** identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.028.682 expedida en Santa Marta – Magdalena, allegó escrito a la Oficina de Talento Humano con R- 2022-003659 informando que padece de una enfermedad oncológica y tiene ostenta la calidad de prepensionable al contar con 1168,57 semanas y 64 años de edad, además mediante escrito con Radicado R – 2022-06269 señala que pertenece a la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores en la Salud de la Gobernación del Magdalena SINTRASAGOMAG y por lo tanto goza de fuero sindical.

### Decreto 508 del 5 de septiembre de 2022

No fue posible evidenciar su publicación; Se consulta continuidad de las gacetas de nombramiento

<https://www.gobernaciondelmagdalena.gov.co/transparencia-resolucion-1519-de-2020/transparencia-normativa/docs-gacetadepartamental/>



por continuidad este decreto aplicaria para la gaceta descargada N° 8.359 del 31 de septiembre de 2022 publicada 08 de septiembre 2022

<https://www.gobernaciondelmagdalena.gov.co/gaceta-no-8-359-de-31-de-agosto-de-2022/>

sin embargo **no se observa publicacion**; ni al buscarlo directamente por numero de **Decreto 508 del 5 de septiembre de 2022**

**Decreto 526 del 12 de septiembre de 2022** - gaceta descargada N° 8.361 del 12 de septiembre de 2022 publicada 13 de septiembre 2022 **decreto 526**

<https://www.gobernaciondelmagdalena.gov.co/gaceta-n8361-de-12-de-septiembre/>

Al revisar contenido del decreto no se obstenta condición de protección

**Decreto 527 del 12 de septiembre de 2022** - gaceta descargada N° 8.361 del 12 de septiembre de 2022 publicada 13 de septiembre 2022 **decreto 527**

<https://www.gobernaciondelmagdalena.gov.co/gaceta-n8361-de-12-de-septiembre/>

Al revisar contenido del decreto no se obstenta condición de protección

Siendo estas vacantes definitivas, y vacantes ocupadas en provisonalidad, para el grado, nombre de cargo y código, que son **equivalentes** a la vacante que yo aspiré denominado PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Código 219, Grado 2, en la GOBERNACIÓN DE DEL MAGDALENA.

2.6 El día veintisiete (27) de junio de dos mil diecinueve (2019), se expidió la Ley 1960 del 2019 "Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones" en cuyo artículo 6 se consignó: "El numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, quedará así: "ARTICULO 31. El proceso de selección comprende: 1. (...) 2. (. . .) 3. (...) 4. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada por delegación de aquella elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de mérito se

Accionadas: COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL  
– CNSC GOBERNACIÓN DE MAGDALENA

Accionante: KARINA COROMOTO DIAZ JAIMES

cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria de concurso en la misma entidad”

2.7 El día uno (01) de Agosto de dos mil diecinueve (2019), la Comisión Nacional del Servicio Civil emitió un "Criterio unificado sobre las listas de elegibles en el contexto de la Ley 1960 de 2019", a través del cual restringió la aplicabilidad de lo dispuesto para la reforma de la Ley 909 de 2004 en lo que respecta al uso de las listas de elegibles para proveer vacancias definitivas, especificando que la reforma legal sólo podía ser aplicada para proveer vacancias en las convocatorias a concurso de mérito realizadas con posterioridad de la entrada en vigencia de la citada ley.

2.8 El día 30 de marzo de 2020 el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA expidió el decreto número • 498 de 2020 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública” donde se determinó (y señalaré con azul):

## DECRETA:

**Artículo 1. Modificar el artículo 2.2.5.3.2 del Capítulo 3 del Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, el cual quedará así:**

**Artículo 2.2.5.3.2. Orden para la provisión definitiva de los empleos de carrera. La provisión definitiva de los empleos de carrera se efectuará teniendo en cuenta el siguiente orden:**

- 1. Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera y cuyo reintegro haya sido ordenado por autoridad judicial.**
- 2. Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de desplazado por razones de violencia en los términos de la Ley 387 de 1997, una vez impartida la orden por la Comisión Nacional del Servicio Civil.**
- 3. Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el cargo y que hubiere optado por el derecho preferencial a ser reincorporado a empleos iguales o equivalentes, conforme con las reglas establecidas en el presente decreto y de acuerdo con lo ordenado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.**

Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer puesto en lista de elegibles para el empleo ofertado que fue objeto de convocatoria para la respectiva entidad. Si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo deberá adelantarse proceso de selección específico para la respectiva entidad.

**Parágrafo 1°. Una vez provistos en período de prueba los empleos convocados a concurso con las listas de elegibles elaboradas como resultado de los procesos de selección, tales listas, durante su vigencia, podrán ser utilizadas para proveer de manera específica las vacancias definitivas que se generen en los mismos empleos inicialmente provistos, con ocasión de la configuración para su titular de alguna de las causales de retiro del servicio consagradas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 y para proveer las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria de concurso en la misma Entidad.**

---

Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 21 de la Ley 909 de 2004.

2.9 El día 22 de enero de 2021, la comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, expidió acuerdo 13 por el cual: “Por el cual se deroga el numeral 8 del artículo 2 y se modifican los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 del Acuerdo No. CNSC 0165 de 2020”

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. Derogar el numeral 8 del artículo 2 del Acuerdo No. CNSC-0165 de 2020.

ARTÍCULO SEGUNDO. Modificar el artículo 8 del Acuerdo No. CNSC-0165 de 2020, en los siguientes términos: ARTICULO 8°. Uso de Lista de Elegibles. Durante su vigencia las listas de elegibles serán utilizadas para proveer definitivamente las vacantes de la respectiva entidad, en los siguientes casos:

1. Cuando el elegible nombrado no acepte el nombramiento o no se posesione en el empleo o renuncie durante el periodo de prueba o no supere el periodo de prueba.
2. Cuando, durante su vigencia, se genere la vacancia definitiva de un empleo provisto mediante la lista de elegibles conformada en virtud del respectivo concurso de méritos, con ocasión de alguna de las causales de retiro del servicio consagradas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004.
3. Cuando, durante su vigencia, se generen nuevas vacantes del “mismo empleo” o de “empleos equivalentes” en la misma entidad. ARTICULO TERCERO. Las demás disposiciones contenidas en el Acuerdo No. CNSC-0165 de 2020, permanecerán incólumes.

ARTÍCULO TERCERO. Las demás disposiciones contenidas en el Acuerdo No. CNSC-0165 de 2020, permanecerán incólumes.

Como mi situación jurídica frente al concurso no esta definida aun este acuerdo viene a controlar lo relacionado con el Proceso de Selección Convocatoria Nos. 1137 a 1298 y 1300 a 1304 de 2019 - Boyacá, Cesar y Magdalena / GOBERNACION DEL MAGDALENA

2.10 El Tribunal Administrativo Del Tolima, y de radicado: 73001-33-33-005-2020-00058-01, en la Acción de Tutela contra el ICBF y la CNSC, es importante mencionar, aunque una de las entidades accionadas es diferente (el ICBF), se trata de casos análogos a la presente acción constitucional porque entre otras cosas en su ratio decidendi acoge la aplicación del artículo 6 de la Ley 1960 de 2019 con efecto retrospectivo que no retroactivo, mencionando en tal sentencia:

“Adicionalmente, se debe tener en cuenta que aunque la redacción original del numeral 4° del artículo 31 de la ley 909 del 23 de septiembre de 2004 dictó que con la lista de elegibles “se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso”, la ley 1960 del 27 de junio de 2019, modificó tal artículo, según el cual con la lista de elegibles “se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria de concurso en la misma entidad”. Resulta, entonces, evidente que ha operado un tránsito de legislación en cuya virtud, compete la sala evaluar si se dan los presupuestos para que la Ley 1960 de 2019 sea aplicable a Alexis Díaz González, María Cecilia Arroyo y Yennifer Ruiz Gaitán o si, por el contrario, debe seguirse con la Ley 909 de 2004 sin modificaciones. Respecto a esto, es claro que, por regla general, las normas rigen hacia el futuro una vez son divulgadas, y excepcionalmente regirán ultra activa o retroactivamente, pero adicionalmente se ha aceptado otra modalidad de aplicación temporal de las normas denominada retrospectividad, que a las luces de la sentencia T-564 de 2015 consiste en: “...la posibilidad de aplicar una determinada norma a situaciones de hecho que, si bien tuvieron lugar con anterioridad a su entrada en vigencia, nunca vieron definitivamente consolidada la situación jurídica que de ellas se deriva, pues sus efectos siguieron vigentes o no encontraron mecanismo alguno que permita su resolución en forma definitiva. En este sentido, ha sido unánimemente aceptado por la jurisprudencia de todas las Altas Cortes que si bien en principio las normas jurídicas solo tienen aplicabilidad a situaciones que tuvieron lugar con posterioridad a su vigencia, ello no presenta impedimento alguno para que, en los casos en los que la situación jurídica no se ha consolidado o sus efectos siguen surtiéndose, una nueva norma pueda entrar a regular y a modificar situaciones surtidas con anterioridad a su vigencia.”

### 3. PRETENSIONES

Por lo expuesto, con base en los hechos, con en las pruebas que se aducen y conforme al derecho, debe entenderse que la GOBERNACION DEL MAGDALENA y la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL no han dado el tratamiento que corresponde a la vacancia definitivas, o a los empleos que se encuentran provistos en provisionalidad y que corresponden a un empleo equivalente o también inclusive al mismo empleo, misma o similar denominación, mismas o similares funciones, mismo o similar grado, y mismo o similar salario que el de los empleos contenidos en la Lista de Elegibles **OPEC No. 4849** de la Convocatoria Nos. 1137 a 1298 y 1300 a 1304 de 2019 - Boyacá, Cesar y Magdalena/ GOBERNACION DEL MAGDALENA ” de la CNSC, en la cual aparezco, sobre todo teniendo en cuenta que existen empleos ocupados en provisionalidad que son equivalentes al empleo por el cual concursé.

Accionadas: COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL  
– CNSC GOBERNACIÓN DE MAGDALENA

Accionante: KARINA COROMOTO DIAZ JAIMES

Por todo lo expuesto, respetuosa y comedidamente me permito SOLICITARLE lo siguiente:

1. Interpongo esta acción Constitucional como una medida provisional mientras puedo acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y dado la gravedad de los hechos, todo esto con el fin de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

2. Se protejan mis derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO (ART 29 C.P.), IGUALDAD (ART. 13 C.P.) Y AL ACCESO AL EMPLEO PUBLICO TRAS CONCURSO DE MERITO (ART 40 NUMERAL 7 Y ART 125 C.P.); PRINCIPIO DE LA CONFIANZA LEGITIMA (ART 29 C.P.); A LA DIGNIDAD HUMANA (ART 1 C.P.) FUNDAMENTAL DE LOS NIÑOS (ARTICULO 44 C.P.); DE PETICIÓN (ART. 23) vulnerados por la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC y la GOBERNACIÓN DE MAGDALENA

3. Se ordene a las entidades accionadas que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación del fallo, realicen los trámites administrativos pertinentes para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 6 y 7 de la Ley 1960 de 2019, en consecuencia, se autorice y use la lista conformada mediante RESOLUCIÓN № 2590 25 de febrero de 2022 para empleos que se encuentran en *provisionalidad, encargo, o vacantes*, teniendo en cuenta que el mismo fue convocado a concurso, e igualmente observándose que la lista se encuentra vigente.

3. Específicamente para lo anterior: - Se ordene a la Comisión Nacional del Servicio Civil se utilice el listado conformado con la RESOLUCIÓN № 2590 25 de febrero de 2022 y se ordene a la GOBERNACIÓN MAGDALENA que, una vez se dé la autorización de la CNSC, proceda a efectuar mi nombramiento en una de las OPEC's declaradas desiertas o que hayan quedado vacantes, o empleos cubiertos en provisionalidad, o por encargo, teniendo en cuenta el el decreto 498 de 2020, la ratio decidendi establecida por la sentencia Corte Constitucional T-081 de 2021 proferida el seis (6) de abril de dos mil veintiuno (2021), en donde claramente se respalda la aplicación del artículo 6 de Ley 1960 de 2019 con efecto retrospectivo

4. Solicito también que mi nombramiento se haga aplicando el acuerdo CNSC #013 de 2021, dado que este es perfectamente aplicable para mi caso, negar esta pretensión seria desconocer que este acuerdo es una actualización expedida por la propia Comisión Nacional del Servicio Civil.

5. Y teniendo en cuenta que los derechos adquiridos no pueden ser desconocidos por las autoridades administrativas, de la misma forma solicito, que esta tutela se resuelva con fundamento en la regla establecida en la sentencia de la Corte Constitucional C-084 de 2018, donde se determinó:

“Para que confluya un derecho adquirido en el ingreso al servicio público por medio de listas o registros de elegibles, se requiere acreditar que: (i) la persona participó en un concurso de méritos; (ii) que el nombre fue incluido en la lista de elegibles y (iii) que existe en efecto una vacante para ser designado.”

6. Se tomen las determinaciones que el señor Juez considere conducentes para la efectividad de la protección de los derechos vulnerados, incluyendo mi nombramiento

#### 4. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Sentencia de la Honorable Corte Constitucional T-340 de 2020 proferida el 21 de agosto de 2020

la Corte Constitucional estableció una clara línea jurisprudencial en relación con la aplicación de la aplicación en el tiempo de la Ley 1960 de 2019. En dicha sentencia la corte estableció y donde señalaré con rojo lo relacionado para mi caso:

##### “3.6. Ley 1960 de 2019 y su aplicación en el tiempo

3.6.1. El 27 de junio de 2019, el Congreso de la República expidió la Ley 1960 de 2019, "Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones". En ella se alteraron figuras como el encargo, se dispuso la profesionalización del servicio público, se reguló la movilidad horizontal en el servicio público y, en particular, respecto de los concursos de méritos, se hicieron dos cambios a la Ley 909 de 2004. El primero de ellos consistió en la creación de los concursos de ascenso, para permitir la movilidad a cargos superiores de funcionarios de carrera dentro de la entidad, así, en la referida ley, se establecieron unas reglas puntuales para la procedencia de estos concursos y se dispuso que la Comisión Nacional del Servicio Civil, en los seis meses siguientes contados a partir de su expedición, debía determinar el procedimiento para que las entidades y organismos reportaran la OPEC, para viabilizar el referido concurso. El segundo cambio consistió en la modificación del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, en el sentido de establecer que, como se mencionó con anterioridad, con las listas de elegibles vigentes se cubrirían no solo las vacantes para las cuales se realizó el concurso, sino también aquellas “vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria de concurso en la misma entidad”. Por último, la normativa en comento dispuso que su vigencia se daría a partir de la fecha de publicación. Como se aprecia, el cambio incluido en el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, comporta una variación en las reglas de los concursos de méritos, particularmente en relación con la utilización de las listas de elegibles. Así, la normativa anterior y la jurisprudencia de esta Corporación sobre el tema, partían de la premisa de que la norma establecía que las listas de elegibles únicamente podrían usarse para los cargos convocados y no otros, a pesar de que con posterioridad a la convocatoria se generaran nuevas vacantes definitivas. Con ocasión de la referida modificación, esta Sala deberá definir la aplicación en el tiempo de dicha norma, comoquiera que, su uso, en el caso concreto, prima facie, proveería un resultado distinto de aquel que podía darse antes de su expedición, no solo debido al cambio normativo, sino también a la consecuente inaplicabilidad del precedente señalado de la Corte respecto del uso de la lista de elegibles, ya que la normativa en la cual se insertaron esos pronunciamientos varió sustancialmente.

3.6.2 Previo a realizar este análisis, es preciso recordar que en otras ocasiones el legislador ha establecido, para casos concretos, que las listas de elegibles deben ser usadas para proveer los cargos convocados, así como aquellas vacantes de grado igual, correspondientes a la misma denominación. Este es el caso de la Ley 201 de 1995 47, que, para el caso de la Defensoría del Pueblo, estableció la aplicabilidad de dicha regla. Esta ley fue demandada en ejercicio de la acción pública de constitucionalidad y en la Sentencia C-319 de 2010 48 se decidió su exequibilidad<sup>49</sup>. Uno de los argumentos que explican la validez de la referida norma es que con ella se logran los principios de la función pública, particularmente los de economía, eficiencia y eficacia, en tanto permite hacer más eficiente el uso del talento humano y de los recursos públicos, ambos escasos para el caso de la Defensoría del Pueblo. Es innegable que la obligación de uso de listas de elegibles vigentes para proveer cargos de igual denominación pero no convocados, en el contexto expuesto, busca garantizar el mérito como criterio exclusivo de acceso a cargos públicos, ya que únicamente se podrá nombrar en las vacantes a las personas que hayan superado todas las etapas de la convocatoria y, además, sean los siguientes en orden de la lista, después de haberse nombrado a las personas que ocuparon los primeros lugares para proveer los cargos ofertados. Adicionalmente, ello permite un uso eficiente de los recursos públicos y del recurso humano, con lo cual se garantiza la plena vigencia los principios que rigen la función administrativa.

3.6.3. Ahora bien, en lo que respecta a la aplicación del artículo 6 la Ley 1960 de 2019 a las listas de elegibles conformadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil y a aquellas que se expidan dentro de los procesos de selección aprobados antes del 27 de junio de 2019, sea lo primero advertir que, por regla general, esta disposición surte efectos sobre situaciones que acontecen con posterioridad a su vigencia. Sin embargo, el ordenamiento jurídico reconoce circunstancias que, por vía de excepción, pueden variar esta regla general dando lugar a una aplicación retroactiva, ultractiva o retrospectiva de la norma, por lo que se deberá definir si hay lugar a la aplicación de alguno de dichos fenómenos, respecto de la mencionada ley. El primero de estos fenómenos, esto es, la retroactividad, se configura cuando la norma expresamente permite su aplicación a situaciones de hecho ya consolidadas. Por regla general está prohibido que una ley regule situaciones jurídicas del pasado que ya se han definido o consolidado, en respeto de los principios de seguridad jurídica y buena fe, así como del derecho de propiedad. Por otro lado, el fenómeno de la ultractividad consiste en que una norma sigue produciendo efectos jurídicos después de su derogatoria, es decir “se emplea la regla anterior para la protección de derechos adquiridos y expectativas legítimas de quienes desempeñaron ciertas conductas durante la vigencia de la norma derogada, no obstante existir una nueva que debería regir las situaciones que se configuren durante su período de eficacia por el principio de aplicación inmediata anteriormente expuesto” . Ninguno de los anteriores efectos de la ley en el tiempo se aplica en el caso subjudice. El último fenómeno, que por sus características es el que podría ser utilizado en el caso



concreto, es el de la retrospectividad, que ocurre cuando se aplica una norma a una situación de hecho que ocurrió con anterioridad a su entrada en vigencia, pero que nunca consolidó la situación jurídica que de ella se deriva, “pues sus efectos siguieron vigentes o no encontraron mecanismo alguno que permita su resolución en forma definitiva” 52. Este fenómeno se presenta cuando la norma regula situaciones jurídicas que están en curso al momento de su entrada en vigencia. Para el caso de la modificación introducida al artículo 31 de la Ley 909 de 2004 por la Ley 1960 de 2019, se tiene que la situación de hecho respecto de la cual cabe hacer el análisis para determinar si hay o no una situación jurídica consolidada es la inclusión en la lista de elegibles. De esta forma, deberá diferenciarse, por un lado, la situación de quienes ocuparon los lugares equivalentes al número de vacantes convocadas y que, en virtud de ello tienen derecho a ser nombrados en los cargos convocados y, por el otro, la situación de aquellas personas que, estando en la lista de elegibles, su lugar en ellas excedía el número de plazas convocadas. Como fue planteado en el capítulo anterior, la consolidación del derecho de quienes conforman una lista de elegibles “se encuentra indisolublemente determinado por el lugar que se ocupó dentro de la lista y el número de plazas o vacantes a proveer” 53. Así las cosas, las personas que ocuparon los lugares equivalentes al número de vacantes convocadas tienen un derecho subjetivo y adquirido a ser nombrados en período de prueba en el cargo para el cual concursaron, de suerte que respecto de ellos existe una situación jurídica consolidada que impide la aplicación de una nueva ley que afecte o altere dicha condición. Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto de quienes ocuparon un lugar en la lista que excedía el número de vacantes a proveer, por cuanto estos aspirantes únicamente tienen una expectativa de ser nombrados, cuando quiera que, quienes los antecedan en la lista, se encuentren en alguna de las causales de retiro contenidas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004. **Para la Sala, el cambio normativo surgido con ocasión de la expedición de la Ley 1960 de 2019, regula la situación jurídica no consolidada de las personas que ocupaban un lugar en una lista de elegibles vigente que excedía el número de vacantes ofertadas, por lo que las entidades u organismos que llevaron a cabo los concursos deberán hacer uso de estas, en estricto orden de méritos, para cubrir las vacantes definitivas en los términos expuestos en la referida ley.** Lo anterior no implica que automáticamente se cree el derecho de quienes hacen parte de una lista de elegibles a ser nombrados, pues el ICBF y la CNSC deberán verificar, entre otras, que se den los supuestos que permiten el uso de una determinada lista de elegibles, esto es, el número de vacantes a proveer y el lugar ocupado en ella, además de que la entidad nominadora deberá adelantar los trámites administrativos, presupuestales y financieros a que haya lugar para su uso. Por último, se aclara que en este caso no se está haciendo una aplicación retroactiva de la norma respecto de los potenciales aspirantes que podrían presentarse a los concursos públicos de méritos para acceder a los cargos que ahora serán provistos con las listas de elegibles vigentes en aplicación de la nueva ley. En efecto, tanto la situación de quienes tienen derechos adquiridos como de quienes aún no han consolidado derecho alguno, están reservadas para las personas que conformaron las listas de elegibles vigentes al momento

de expedición de la ley, de manera que el resto de la sociedad está sujeta a los cambios que pueda introducir la ley en cualquier tiempo, por cuanto, en esas personas indeterminadas no existe una situación jurídica consolidada ni en curso.

3.6.5. En conclusión, con el cambio normativo surgido con ocasión de la expedición de la mencionada ley respecto del uso de la lista de elegibles, hay lugar a su aplicación retrospectiva, por lo que el precedente de la Corte que limitaba, con base en la normativa vigente en ese momento, el uso de las listas de elegibles a las vacantes ofertadas en la convocatoria, ya no se encuentra vigente, por el cambio normativo producido. De manera que, para el caso de las personas que ocupan un lugar en una lista, pero no fueron nombradas por cuanto su posición excedía el número de vacantes convocadas, es posible aplicar la regla contenida en la Ley 1960 de 2019, siempre que, para el caso concreto, se den los supuestos que habilitan el nombramiento de una persona que integra una lista de elegibles y ésta todavía se encuentre vigente.

En síntesis la Corte Constitucional establece en su ratio decidendi que la Ley 1960 de 2019 “para el caso de las personas que ocupan un lugar en una lista, pero no fueron nombradas por cuanto su posición excedía el número de vacantes convocadas”, y explica la sentencia de una forma clara y precisa **“Para la Sala, el cambio normativo surgido con ocasión de la expedición de la Ley 1960 de 2019, regula la situación jurídica no consolidada de las personas que ocupaban un lugar en una lista de elegibles vigente que excedía el número de vacantes ofertadas, por lo que las entidades u organismos que llevaron a cabo los concursos deberán hacer uso de estas, en estricto orden de méritos, para cubrir las vacantes definitivas en los términos expuestos en la referida ley”**.

Teniendo claro que la aplicación de la Ley 1960 de 2019 en el tiempo, solicito a su señoría tomar las medidas para que, en mi caso concreto, se dé aplicación a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, que es:

4 con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada por delegación de aquella elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de méritos se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria de concurso en la misma Entidad.

Y sabemos muy bien como lo prueba la tabla de cargos de este escrito de acción de tutela ( DECRETO 195 DE 19 MAY 2022 - SE HACE NOMBRAMIENTO A LEIDI MARCELA RODRÍGUEZ PRADO en el cual se referencian que existen 4 empleo denominado PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Código 219, Grado 2 ; respuesta derecho de peticion del 15 de noviembre

del 2022 en el que se referencia decretos mediante los cuales fueron otorgados estos empleos en cargos provisionales ) siendo estos cargos equivalentes o “empleos equivalentes” como lo define la Ley 1083 de 2015, la sentencia de la Corte Constitucional T-340 de 2020 es una prueba más para solicitar la inaplicación por inconstitucional el Criterio Unificado expedido por la CNSC el 16 de enero de 2020, pues ahora no solo contradice La Ley 1960 de 2019, sino que además contradice una Sentencia de la Corte Constitucional, precedente jurisprudencial diáfano para el caso en concreto.

Como aspectos preliminares sobre la procedibilidad de la presente acción de tutela, me permito presentar lo siguiente:

Como aspectos preliminares sobre la procedibilidad de la presente acción de tutela, me permito presentar lo siguiente:

Sentencia T-340 de 21 de agosto de 2020 (Destacaré con color lo más relevante para el caso en concreto)

“Ahora bien, desde una perspectiva general, la Corte ha sostenido que, pese a la existencia de las vías de reclamación en lo contencioso administrativo, existen dos hipótesis que permiten la procedencia excepcional de la acción de tutela. La primera, se presenta cuando existe el riesgo de ocurrencia de un perjuicio irremediable, causal que tiene plena legitimación a partir del contenido mismo<sup>15</sup> del artículo 86 del Texto Superior y, por virtud de la cual, se le ha reconocido su carácter de mecanismo subsidiario de defensa judicial. Y, la segunda, cuando el medio existente no brinda los elementos pertinentes de idoneidad y eficacia para resolver la controversia, a partir de la naturaleza de la disputa, de los hechos del caso y de su impacto respecto de derechos o garantías constitucionales. (...) Continua la sentencia T-340 ...

“En el marco específico de las medidas cautelares, la Corte también ha dicho que el juez de tutela tiene la facultad de proteger los derechos fundamentales como objetivo prioritario de acción, y ello lo hace de forma inmediata y con medidas más amplias<sup>22</sup>; y, además, precisó que, aunque se debe revisar dicha herramienta al hacer el estudio de subsidiariedad, lo cierto es que existen importantes diferencias entre la medida cautelar y la acción de tutela, las cuales pueden resumirse así:

“(i) es necesario seguir y ajustarse al procedimiento descrito en la norma y acudir mediante abogado debidamente acreditado, situación que no ocurre con la acción de tutela, como quiera que este es un instrumento que puede ser usado de manera personal por el titular de los derechos vulnerados, sin necesidad de seguir una forma preestablecida, (ii) por regla general, para que una medida cautelar sea decretada, es imperativo prestar caución para asegurar los posibles perjuicios que con ésta se puedan causar<sup>23</sup> y, (iii) la suspensión de los actos que causen la vulneración de los derechos no es de carácter definitivo, puesto que

estas herramientas son transitorias y, en esa medida, la orden final está sometida a las características propias de cada juicio, en contraposición con la protección que brinda el amparo constitucional, que en principio, es inmediato y definitivo.” 24

En este orden de ideas, se concluye que la acción de tutela es procedente por vía de excepción para cuestionar actos administrativos dictados en desarrollo de un concurso de méritos, y que, más allá de la causal del perjuicio irremediable, cabe examinar la eficacia en concreto del medio existente y de la viabilidad sumaria de las medidas cautelares, teniendo en cuenta, como ya se dijo, la naturaleza de la disputa, los hechos del caso y su impacto respecto de derechos, principios o garantías constitucionales, siendo, prevalente, en este escenario, la protección del mérito como principio fundante del Estado colombiano y del actual modelo democrático, como lo señaló expresamente Sentencia T-059 de 201925.”25

Frente a esta explicación tan clara entregada por la H. Corte constitucional solo agregaré que, lo explicado en la sentencia T-340 se asimila perfectamente a mi caso en concreto, pues someterme a una acción legal diferente de la tutela, es permitir que se sigan vulnerando mis derechos fundamentales ya reclamados aquí, derechos que evidentemente han sido vulnerados para mí y para muchas otras personas dentro de las convocatorias cuyos acuerdos fueron firmados antes del 27 de junio de 2019, por la ya bien conocida posición tomada por la CNSC con sus controvertidos criterios unificados del 1 de agosto de 2019 y 16 de enero de 2020, Criterios que claramente contradicen la jurisprudencia establecida con la sentencia T-340 de 21 de agosto de 2020, no es una daño menor que las entidades accionadas con diferentes excusas sin fundamento jurídico y/o fáctico me nieguen el acceso a un cargo en carrera administrativa por mérito, más teniendo en cuenta que hay vacantes, y que el día de hoy ocupo el primer de elegibilidad en mi área en toda Colombia.

Mismo empleo es diferente de Empleo Equivalente

## 5. EXISTEN VACANTES EN LA GOBERNACIÓN DE MAGDALENA EN LA ACTUALIDAD

Como lo manifiesta la Gobernación de MAGDALENA en su propia respuesta existen vacantes ocupadas en provisionalidad no precisamente todos de acuerdo al orden de protección según decretos de nombramiento N°390 del 7 de julio del 2022; 508 del 5 de septiembre de 2022; 526 del 12 de septiembre de 2022 y 527 del 12 de septiembre de 2022, siendo estas vacantes definitivas, y vacantes ocupadas en provisionalidad, para el grado, nombre de cargo y código, que son equivalentes al que yo aspiré y que señalé en puntos anteriores.

## 6. EL DERECHO DE LOS PROVISIONALES FRENTE A LOS QUE SE ENCUENTRAN EN LISTAS DE ELEGIBLES EN CUANTO A LOS EMPLEOS PÚBLICOS

Comenzaré realizando la siguiente pregunta: ¿Quiénes tienen derecho a ocupar los cargos públicos frente a la constitución?

Para contestar esta pregunta, me remitiré al “Concepto Marco N.º 9 DESVINCULACIÓN DE PROVISIONALES EN SITUACIONES ESPECIALES PARA PROVEER EL CARGO CON QUIEN GANÓ LA PLAZA MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS”, emitido y publicado por el Departamento Administrativo de la Función Pública el 29 de agosto de 2018 :

(...)

“1. Los concursos de méritos y sus efectos

El artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, consagra:

“ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción.”

De conformidad con lo anterior, la provisión definitiva de los empleos públicos de carrera debe hacerse mediante el sistema de mérito. Este se considera un óptimo instrumento para la provisión de cargos públicos basado en criterios meritocráticos y constituye uno de los ejes definitorios de la Constitución Política de 1991, es especial por su relación estrecha con el principio de acceso al desempeño de cargos públicos, la igualdad, la estabilidad y demás garantías contempladas en el artículo 53 de la Constitución.”

(...)

De lo anterior se deduce que la constitución política de 1991, privilegia el sistema de mérito, el concepto también hace referencia a lo siguiente:

(...)

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.5.3.4. del Decreto 1083 de 2015, y el criterio expuesto por la Corte Constitucional, la terminación del nombramiento provisional o el de su prórroga, procede por acto motivado, y sólo es admisible una motivación donde la insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de sanciones

disciplinarias, la calificación insatisfactoria u otra razón específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el empleado concreto.

En conclusión, los servidores públicos que ocupan en provisionalidad un cargo de carrera gozan de una estabilidad laboral relativa, lo que implica que únicamente pueden ser removidos por causas legales que obran como razones objetivas que deben expresarse claramente en el acto de desvinculación, dentro de las que se encuentra la provisión del cargo que ocupaban, con una persona de la lista de elegibles conformada previo concurso de méritos. En esta hipótesis, la estabilidad laboral relativa de las personas vinculadas en provisionalidad cede frente al mejor derecho de quienes superaron el respectivo concurso.

**En ese sentido, la situación de quienes ocupan en provisionalidad cargos de carrera administrativa, encuentra protección constitucional, en la medida en que, en igualdad de condiciones pueden participar en los concursos y gozan de estabilidad laboral, condicionada al lapso de duración del proceso de selección y hasta tanto sean reemplazados por quien se haya hecho acreedor a ocupar el cargo en virtud de sus méritos evaluados previamente .** “(El énfasis por fuera del texto original)

(...) Con el análisis del texto se hace muy claro que los empleos en provisionalidad pueden participar también en los concursos y gozan de estabilidad laboral, estabilidad que está condicionada al lapso de duración del proceso de selección y hasta cuando sean reemplazados por quien se haya hecho acreedor a ocupar el cargo público en un concurso de méritos.

Retomo el siguiente párrafo de la sentencia C-588 de 2009:

“De conformidad con la interpretación realizada por la Corte Constitucional, la carrera administrativa se fundamenta única y exclusivamente en el mérito y la capacidad del funcionario público, mérito que, en tanto elemento destacado de la carrera administrativa, comparte el carácter de regla general que a ésta le corresponde, siendo en consecuencia el mérito el factor definitorio para el acceso, permanencia y retiro del empleo público y, en esa medida, el artículo 125 superior establece el criterio del mérito como regla general. Estrechamente vinculado al mérito se encuentra el concurso público, que el Constituyente previó como mecanismo para establecer el mérito y evitar que criterios diferentes a él sean los factores determinantes del ingreso, la permanencia y el ascenso en carrera administrativa, constituyéndose el concurso en un instrumento que garantiza la selección fundada en la evaluación y la determinación de la capacidad e idoneidad del aspirante para desempeñar las funciones y asumir las responsabilidades propias de un cargo, e impedir que prevalezca la arbitrariedad del nominador y que, en lugar del mérito, favorezca criterios subjetivos e irrazonables. **La jurisprudencia**

constitucional, también ha manifestado que se quebranta la igualdad cuando se permite el acceso automático a la carrera administrativa, esto es, cuando a determinadas personas se

les autoriza el ingreso a la carrera sin necesidad de pasar por un proceso orientado a valorar sus capacidades o méritos y con fundamento en la sola circunstancia de haber desempeñado en provisionalidad el cargo de carrera, y se quebranta por cuanto no tienen adquirido un derecho de ingreso a la carrera, ni siquiera por el simple hecho de haber ejercido el cargo por un periodo largo de tiempo.” (El énfasis por fuera del texto original)

Adicional a esto, seguir con el nombramiento de los empleos provisionales, va en contra de lo estipulado en el plan de desarrollo 2018-2020, “ARTÍCULO 149º. REDUCCIÓN DE LA PROVISIONALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO. Las entidades coordinarán con la Comisión Nacional del Servicio Civil la realización de los procesos de selección para el ingreso a los cargos de carrera administrativa y su financiación; definidas las fechas del concurso las entidades asignarán los recursos presupuestales que le corresponden para la financiación, si el valor del recaudo es insuficiente para atender los costos que genere el proceso de selección, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 1033 de 2006.” Quiero decir con otras palabras, tenemos la oportunidad de cumplir con lo establecido en el artículo 125 de la constitución, por lo cual esperamos que de las instituciones del estado sigan ese camino, pero ¿Cómo reducir la provisionalidad en el empleo cuando la GOBERNACIÓN DE MAGDALENA y la CNSC no toman las medidas necesarias con las herramientas que les da la propia ley el día de hoy?

## 7 . LA NO APLICACIÓN DEL DECRETO 498 DE 2020 Y DE LOS ARTICULOS 6 Y 7 DE LA LEY 1960 DE 2019

Antes quiero resaltar que me están vulnerando derechos fundamentales (y de forma reiterativa), ya reclamados en esta acción, y una parte de la vulneración de estos derechos se debe a la no aplicación del decreto 498 de 2020 con efecto retrospectivo, y que aplica precisamente para “la Proceso de Selección No. 805 de 2018 – GOBERNACION DE MAGDALENA

Para convocatorias anteriores a la firma expedición de la ley, afirmación reiterativa de la CNSC, aplicación de la ley más favorable frente a la ultraactividad aplicada por la CNSC en el segundo criterio inconstitucional

Referente a este punto debo hacer notar que la comisión Nacional del Servicio Civil, con sus criterios Unificados 1 y 2 no se ciñen a la Ley 1960 de 2019 ni tampoco a la sentencia de la H. Corte Constitucional T-340 (incluso se apartan de la sentencia T-081 de 2021), podemos sintetizar que no se ciñen a la Ley 1960 de 2019 debido básicamente a dos razones:

1. Separa el contenido de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, en dos conceptos: El del “mismo empleo” y el de “cargos equivalentes” y solo toma el concepto de “mismo empleo” excluyendo la parte de “cargos equivalentes” y no

dándoles aplicación, es decir viola el principio de **inescindibilidad** de la Ley e igualmente el de **legalidad**.

2. El criterio expone que solo aplicará para convocatorias que se firmen con posterioridad al 27 de junio de 2019, fecha de expedición de la Ley 1960 de 2019, para mi caso Proceso de Selección Convocatoria Nos. 1137 a 1298 y 1300 a 1304 de 2019 - Boyacá, Cesar y Magdalena / GOBERNACION DEL MAGDALENA - no aplica según el criterio dicha Ley 1960 de 2019, esto contradice abiertamente la sentencia de la Honorable Corte Constitucional T-340 de 21 de agosto de 2020, el decreto 498 de 2020, el propio criterio unificado del 22 de septiembre de 2020 y el acuerdo 13 de enero de 2021

#### 8. CONFUSIÓN TRANSMITIDA EN EL COMUNICADO -CNSC- DEL 16 DE ENERO, ACUERDO 165 DEL 12 DE MARZO DE 2020 DE LA CNSC EVADIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA LOS ARTICULOS 6 Y 7 DE LA LEY 1960 DE 2019

Analizado el fenómeno de la retrospectividad y el principio de favorabilidad aplicables en el caso en concreto, analizaré ahora otro aspecto del criterio del día 16 de enero de 2020 la Comisión Nacional del Servicio Civil, donde se afirma en uno de sus apartes:

“De conformidad con lo expuesto, las listas de elegibles conformadas por la CNSC y aquellas que sean expedidas en el marco de procesos de selección aprobados con anterioridad al 27 de junio de 2019, deberán usarse durante su vigencia para proveer las vacantes de los empleos que integraron la Oferta Pública de Empleos de Carrera-OPEC- de la respectiva convocatoria y para las nuevas vacantes que se generen con posterioridad y que correspondan a los “mismos empleos”, entendiéndose, con igual denominación, código, grado, asignación básica mensual, propósito, funciones, ubicación geográfica y mismo grupo de aspirantes; criterios con los que en el proceso de selección identifica el empleo con un número de OPEC”

Observamos que la CNSC al hacer referencia a la fecha de expedición de la Ley 1960 de 2019 (27 junio de 2019) hace una asociación entre la ley 1960 y el comunicado del 16 de enero de 2020, dándonos a entender que en la Ley 1960 de 2019 se afirma:

“los empleos que integraron la Oferta Pública de Empleos de Carrera-OPEC- de la respectiva convocatoria y para las nuevas vacantes que se generen con posterioridad y que correspondan a los **“mismos empleos”**, entendiéndose, con igual denominación, código, grado, asignación básica mensual, propósito, funciones, ubicación geográfica y mismo grupo de aspirantes; criterios con los que en el proceso de selección identifica el empleo con un número de OPEC” (negrita fuera de texto)

Pero en ningún momento la ley 1960 de 2019 afirma lo del anterior párrafo, lo que verdaderamente se afirma en la ley 1960 es:



“4. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional de/ Servicio Civil o la entidad contratada por delegación de aquella elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de méritos se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria de concurso en la misma Entidad.” (negrita fuera de texto)

Retomaré algunas definiciones del Diccionario del español jurídico:

Cargo Gra. Oficio que ejerce un órgano del que es titular una persona en una determinada organización .

Empleo 1. Lab. Puesto de trabajo

En el ámbito laboral normalmente empleo y cargo se toman como sinónimos .

De tal forma que cuando la Ley 1960 afirma **cargos equivalentes**, podemos tomar el concepto como empleos **equivalentes**, y este concepto está muy claramente definido en el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 se establece: “Artículo 2.2.11.2.3. Empleos **equivalentes**. Se entiende que un cargo es equivalente a otro cuando tienen asignadas funciones iguales o similares, para su desempeño se exijan requisitos de estudio, experiencia y competencias iguales o similares y tenga una asignación básica mensual igual o superior, sin que en ningún caso la diferencia salarial supere los dos grados siguientes de la respectiva escala salarial cuando se trata de empleos que se rijan por la misma nomenclatura, o en el 10% de la asignación salarial cuando a los empleos se les aplique nomenclatura diferente.”

Si la interpretación mencionada en el concepto CNSC del 16 de enero de 2020 se refiere solo a los “**mismos empleos**” en realidad lo que está es escindiendo lo dispuesto en la ley 1960 de 2019 al tomar solo la parte

**OPEC No. 4849** referente a **las vacantes para las cuales se efectuó el concurso** y las vacantes definitivas **de cargos equivalentes** no convocados.

Es decir, el comunicado del 16 de enero de 2020 de la **CNSC**, crea confusión en el lector al asociar la fecha del 27 de junio de 2019, (en la que salió a la luz la ley 1960) con el concepto “**mismos empleos**” concepto que es **de facto** similar a “**vacantes para las cuales se efectuó el concurso**” según el mencionado comunicado CNSC, pero completamente diferente al concepto “**cargos equivalentes**” mencionado en la Ley 1960 de 2019 de donde todos los ciudadanos debemos partir en este tema aquí tratado.

Y si lo que pretendía hacer la CNSC con su comunicado del 16 de enero de 2020 era equiparar “**mismos empleos**” del comunicado de esa fecha con “**empleos equivalentes**” de la ley 1083 de 2015, estaría cometiendo un grave error.

Además, la CNSC ha seguido emitiendo comunicados con diferentes nombres donde claramente expresa que no va aplicar la Ley 1960 de 2019 para convocatorias cuyos acuerdos se hayan firmado con anterioridad a la fecha de promulgación de dicha ley. Como muestra de ello es el ACUERDO N.º 0165 DE 2020, situación que se evidencia en el último párrafo donde se informa lo siguiente: “PARAGRAFO: Para los procesos de selección aprobados con anterioridad a la expedición de este Acuerdo, se aplicaran las disposiciones contenidas en la normatividad vigente al momento de su aprobación.”

Y con este último párrafo de dicho acuerdo evade una parte de la aplicación de la Sentencia del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA en contra de la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, E INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, en sentencia de segunda Instancia, con número de radicación 76 0001 33 33 021 2019 00234 01, donde se declaró inconstitucional el Criterio 1 (del 1 de agosto de 2019) relacionado con el artículo 6 de la ley 1960 de 2019 donde dentro de sus consideraciones manifestó:

“7.4. Tesis de la Sala Mixta de Decisión La Sala considera que las demandadas vulneran los derechos de la actora y de todos los integrantes de la lista de elegibles al no aplicar el artículo 6º e ley 1960 de 2019 so pretexto del “Criterio Unificado sobre las listas de elegibles en el contexto de la Ley 1960 del 27 de junio de 2019” reglamento que excede la norma de mayor jerarquía desarrollada, al condicionar las listas de elegibles vigentes a la fecha de la convocatoria del concurso, limitante que no establece la ley y que desconoce principios constitucionales como el del mérito para acceder a cargos públicos; en consecuencia, la sentencia será revocada en su lugar para en su lugar, tutelar los derechos fundamentales de la accionante, con efectos intercomunis, respecto de quienes hacen parte de la lista de elegibles de conformidad con lo establecido T-946 de 2011”

Lo que hace entonces la CNSC es no aplicar de facto el artículo 6 de la ley 1960 debido en un comienzo a que el tribunal del Valle solo le dio efectos intercomunis para los ciudadanos de la lista de elegibles del caso decidido en ese momento, pero se hace evidente con esto que la ley debe aplicarse a todas las personas por el principio de igualdad que es el que finalmente pedimos se aplique todos los que figuramos en las listas de elegibles.

Sin embargo, y como ya se mencionó, no puede seguir presumiendo la CNSC del Criterio Unificado del 16 de enero de 2020 cuando el Tribunal de Pamplona lo declaró inconstitucional ¡3 veces!, pues además contradice lo establecido en la Jurisprudencia de la corte en reciente sentencia T-340 de 21 de agosto de 2020.

## 9. PRUEBAS Y ANEXOS

Para dar sustento a lo anterior, presento las siguientes pruebas y anexos:

9.1. En digital se aportan los siguientes documentos (para el oportuno traslado y valoración del Juez Constitucional)

A. Copia de la cédula de ciudadanía del accionante

resolución No 2590 lista de legible opec 4849

Copia del acuerdo del “proceso de selección , convocatoria nos. 1137 a 1298 y 1300 a 1304 de 2019 - boyacá, cesar y magdalena 20191000004476 del 14-05-2019

B. Ley 1960 del 27 de junio de 2019 que modifica la ley 909 de 2004.

C. Criterio unificado "uso de listas de elegibles en el contexto de la ley 1960 de 27 de junio de 2019", fechado 16 de enero del año 2020 por del presidente de la cnscc, doctor fridole ballén duque.

D. Circular externa n° 0001 del 21 de febrero del año 2.020, mediante la cual, la comisión nacional del servicio civil, procede a impartir lineamientos en relación a reporte de nuevas vacantes y utilización de lista de elegibles

E. Decreto n° 498 del 30 de marzo del año 2020., por medio del cual el departamento administrativo de la función pública, modifica y adiciona el decreto 1083 de 2015, único reglamentario del sector de la función pública.

F. Decreto 195 de 19 may 2022 - se hace nombramiento a leidi marcela rodríguez prado y se termina nombramiento de rosalba navarro diaz granados

G. Decreto 390 de 7 de julio de 2022 por medio del cual se nombra luz garcia y termina provisionalidad patricia serrano

H. Gaceta n°8359 de 31 agosto

I. Gaceta n°8360 de 09 de septiembre de 2022

NOTIFICACIONES:

Recibiré notificaciones en mi correo electrónico:

Correo Electrónico: [karcodija85@hotmail.com](mailto:karcodija85@hotmail.com)

Dirección calle 10 bn # 4a -69 el bosque Cucuta Norte de Santander Celular 3162404268

La demandada GOBERNACIÓN DE MAGDALENA Carrera 1c N°16-15 Palacio Tayrona  
Santa Marta – Magdalena PVX: 5-4381144

Correos para Notificaciones:

[despacho@magdalena.gov.co](mailto:despacho@magdalena.gov.co)

Accionadas: COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL  
– CNSC GOBERNACIÓN DE MAGDALENA  
Accionante: KARINA COROMOTO DIAZ JAIMES

[juridica@magdalena.gov.co](mailto:juridica@magdalena.gov.co)

[contactenos@magdalena.gov.co](mailto:contactenos@magdalena.gov.co)

La demandada Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), en la carrera 16 N° 96-64, piso 7, en Bogotá D.C., Colombia. PBX 57 (1) 3259700 Fax 3259713.

Correo para notificaciones judiciales:

[notificaciones.judiciales@cncs.gov.co](mailto:notificaciones.judiciales@cncs.gov.co)

Agradeciendo la atención prestada,

Sin otro particular



KARINA COROMOTO DIAZ JAIMES  
C.C.1094242834 de pamplona